

SENDA TRAZADA

EL MUNDO. LUNES 20 DE MAYO DE 1996

ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO

En las ruedas de Prensa, las frases del poder parecen claras porque son cortas. Pero Aznar se refugia en la obscuridad de su larga oración para decir que un Gobierno no puede investigar los crímenes y robos del Gobierno anterior, sin entrar en una senda peligrosa para la democracia y subvertir su lógica. Esta inaudita doctrina supone que denunciar lo punible no es tarea del Gobierno (¡como si no tuviera un ministerio fiscal y un deber legal de dar las pruebas a los jueces!) y que la responsabilidad política se ha evaporado en las urnas (¡como si el paso a la oposición de un gobernante legitimara su deshonestidad!). Aunque fueran de buena fe, los errores de la autoridad, sostenidos con la fuerza del Estado y la coacción de la propaganda, carecen siempre de la inocencia que a veces caracteriza a los de los particulares. Poco nos importa la buena o mala fe de Aznar, si su pernicioso error prospera en los juzgados, por no entregar los documentos que le piden; o en el Parlamento, por vetar la comisión de investigación pedida por cuatro grupos; o en los medios de comunicación, por imponer sus aberrantes tesis como pasto para listos y aduladores que las repitan con aires de comprenderlas.

No hay investigación legal de la verdad que pueda ser peligrosa para la senda de la libertad o la lógica de la democracia. Lo subversivo es la ocultación por este Gobierno de la subversión de todos los valores llevada a cabo por el otro. Aunque sólo fuera por la función educativa que el conocimiento público de la verdad tiene para las masas gobernadas, aunque no fuera absurdo que sean inexigibles las responsabilidades del pasado a quien ha dejado de tenerlas en el futuro, lo que se espera del Gobierno no es que controle a la oposición, cosa que ningún imbécil le ha pedido, sino que investigue y diga la verdad sobre los crímenes del Gobierno cesante. Y no sólo por razones éticas, como se dice sin conocer el alcance de la responsabilidad política, sino por deber gubernamental y lealtad a su promesa. Las urnas no depuran las responsabilidades políticas de los elegidos por tres razones irrefutables: no se eligen personas individualizadas sino listas de partido; los electores no expresan los motivos de su voto; la jurisdicción electoral no tiene competencia, en una democracia, para sentenciar cuestiones de moralidad o de veracidad.

Si es absurdo que un Parlamento pueda acordar la destitución de un jefe de Gobierno cesado, no lo es que la mayoría sabedora de sus pasadas fechorías lo declare indigno de la confianza pública, para el caso de que los tribunales no lo castiguen con la pérdida de sus derechos políticos, por no poder apreciar las pruebas escondidas bajo el falso manto de la seguridad del Estado. Quiero suponer que Aznar es libre de caminar hacia el deshonor o hacia la dignidad. Lo que no puede hacer, sin descubrir la superchería, es decorar la mueca sonriente de la indignidad con la fea máscara de la ignorancia doctrinaria. ¿Sabe que la voz responsabilidad fue creada en nuestra lengua, antes que en inglés y francés, para definir las consecuencias personales y desagradables de los malos actos de gobierno? ¿Qué confianza le inspira el sistema político si la investigación de la verdad lo pone en peligro? ¿Qué lógica será subvertida por el conocimiento de la verdad en la sospecha nacional que motivó el adelanto de las elecciones y la llegada de su partido al poder? Si no entrega los papeles del CESID ni crea una comisión parlamentaria, estará ocultando la razón por la que está en el gobierno. Y nacerá el derecho a sospechar que se comprometió a caminar sobre la senda trazada por su antecesor.